

Por: Rafael Orduz

La dieta diaria de los colombianos será rica en sapos en los próximos meses y años, cuota de la ceguera colectiva para superar décadas de conflicto armado y violencia.

Todos se relacionan con algún grado de impunidad, mayor o menor, frente a graves delitos cometidos por combatientes y no combatientes en este conflicto de más de 50 años.

Qué tantos batracios hay que comerse y de qué tipo es asunto de la política, es decir, de las fuerzas involucradas en el proceso que defienden, obvio, sus intereses y, también, del grado de éxito que tengan para colocarse en la foto. Parece ser que, para que los acuerdos de La Habana sean realidad, se requieren dosis de impunidad a diestra y siniestra. Impunidades asimétricas no funcionan.

Incluyen, fuera de los directamente relacionados con los actos de insurgencia, aquellos delitos que llaman conexos. Así, en el menú de los sapos a digerir habrá inmensa variedad: narcotráfico y falsos positivos, entre los más notables. Fuera de los cometidos por los no combatientes, que financiaron masacres y desapariciones, entre otras joyas de la degradación del conflicto en Colombia.

La lógica de cada una de las fuerzas al respecto será de costo-beneficio. No hay ningún incentivo para que algunas de ellas acepte, por ejemplo, que haya nuevos senadores de la República provenientes de la antigua guerrilla, sin pagar cárcel por delitos atroces, excepto que medien contraprestaciones de peso. Si en la balanza entran otros perdones y olvidos, como los relacionados con los falsos positivos o los apoyos explícitos al paramilitarismo por parte de hacendados y empresarios, no hay motivo para rechazar la presencia de senadores provenientes de las, para entonces, disueltas Farc.

De ahí el clima de optimismo de estos días en toldas de lado y lado. En el fondo, con excepción de una u otra ingenuidad, nadie espera que haya cambios estructurales en la economía y la sociedad, simplemente porque nadie (de la foto) está interesado en ellos. El cuento básico, el cuello de botella, es el borrón y cuenta nueva.

No obstante, existe un actor crucial para el país, no representado en el actual proceso de negociación. Muchos hablan a nombre de él, incluyendo el Gobierno y la

guerrilla. Se trata de los niños, niñas y jóvenes reclutados de forma inmisericorde por la guerrilla y (en su momento) por los grupos paramilitares. Inmersos en actos de violencia a la fuerza, se trata de una de las peores formas de degradación del conflicto en Colombia.

Entre 1999 y 2015 el ICBF ha atendido a cerca de 6.000 menores reclutados, cifra claramente inferior a la realidad. ¿Qué proporción de los guerrilleros que son jóvenes adultos fueron reclutados de niños?

Si a los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento ilegal no se les restablece y reparan integralmente sus derechos, estaremos frente a un sapo indigerible, de funestas consecuencias para la sociedad colombiana.

<http://www.elspectador.com/opinion/el-sapo-mayor-los-ninos-reclutados-columna-545843>